

Pasado, presente y futuro en la enseñanza privada

LA NUEVA consellera de Enseñanza, Irene Rigau, tomó posesión del cargo. Perfecta conocedora del mundo de la educación, nunca escondió sus profundas convicciones, en numerosas entrevistas, declaraciones y foros. En plena campaña, comprometió plenos conciertos para la Secundaria postobligatoria privada, en el menor plazo posible, y amplias ayudas para el infantil privado. Bendijo los conciertos para las escuelas de élite, incluso para aquellas que seleccionan al alumnado por sexo. Su modelo educativo no es, por supuesto, el de CCOO, coeducativo y basado en la integración no sólo en lo lingüístico sino también por clase, origen, sexo o cualquier otra condición humana.

Recién nombrada, la primera medida ha sido el cambio de nombre de la Consejería, que pasa nuevamente de Educación a Enseñanza, fiel reflejo de una voluntad de devolver a las familias el papel de primer agente educador y al deseo de adelgazar a la escuela de las múltiples tareas que ésta ha ido asumiendo ante la imperante desconciliación de la vida laboral y familiar.

A continuación, ha lanzado la idea de regresar a las 5 horas lectivas en la enseñanza pública lo cual, de no mediar variaciones improbables en la privada, nos retrotraería a la situación anterior, abandonando la idea de una doble red de centros en condiciones de igualdad: gratuidad, equidad, mismo horario, no discriminación y no selección del alumnado... Propone también medidas de analogía... pero inversas, esto es, de la pública respecto a la privada; por ejemplo, el aumento de las horas lectivas en pública, dado que las actuales son, sobre todo en Secundaria, "un lujo que no nos podemos permitir" (sic). En todas las medidas, se funde una apuesta ideológica por la enseñanza privada con la imposición de unas fuertes restricciones presupuestarias para todos (salvo para las empresas privadas, por supuesto).

En los próximos cursos se completará el crecimiento de alumnado en Infantil y Primaria y comenzará un incremento de entre 150.000 y 180.000 alumnos en Secundaria. Estas cifras son, por supuesto, sólo contabilizando los alumnos que ya están en el sistema, esto es, sin contar con ningún repunte en inmigración ni con la reincorporación de jóvenes desempleados que deseen completar o mejorar su formación.

En el horizonte, no se advierte planificación alguna de aumento de la enseñanza pública, de donde se deduce un elevado crecimiento para la privada concertada, nuevamente por razones ideológicas y económicas: con un mayor número de horas por docente, menores plantillas, mayores ratios alumnos-profesor, sin inversiones en suelo, inmuebles, equipamientos y mantenimiento, la privada sigue siendo la gran baza ahorradora a jugar y más en estos tiempos de crisis. Claro está que los bajos costes que genera a la Administración, los pagan otros: los padres mediante cuotas y los profesores mediante horas, sobre esfuerzo y, en definitiva, salud.

Cercana ya la homologación salarial con la pública en julio de 2012 -empañada por los recientes e infames recortes del 5'3% en primaria y del 7'2% en ESO- y aprobada en la LEC la homologación de condiciones de trabajo para el 2017, nos tememos que la voluntad política de hacer repercutir la crisis sobre los trabajadores desemboque en un nuevo incumplimiento de la legalidad vigente y en la demora en el calendario de homologación. La consellera, tan explícita siempre en sus intenciones, ha eludido hacer público su compromiso con nuestras legítimas reivindicaciones y con el cumplimiento de la ley. Sin novedades. Los derechos o se luchan o se pierden. El futuro o es nuestro o es negro.